

Tunja, 15 de enero de 2025

Honorables Magistrados
Consejo De Estado. (Reparto)
Bogotá D.C

Cordial Saludo,

Ref: Acción de Tutela

Accionante: JORGE ENRIQUE GUÍO PINTO

Accionadas: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de Carrera Judicial; Consejo
Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare.

Jorge Enrique Guío Pinto identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, de manera atenta me permito interponer acción de tutela en contra del Consejo Seccional de la judicatura de Boyacá y Casanare, así como contra el Consejo Superior de la judicatura - Unidad de Administración Carrera Judicial, al considerar vulnerados mis derechos fundamentales a la seguridad jurídica, al debido proceso, y las garantías y derechos que como servidor de Carrera ostento, entre ellos el traslado del servidor de carrera; lo anterior con fundamento en los siguientes:

HECHOS

1. Me posesioné como servidor de carrera el 5 de mayo de 2023 en el cargo de Escribiente Municipal.
2. Con ocasión a solicitud de traslado, el 11 de julio de 2024, me posesioné en el Juzgado Quinto Civil Municipal Transitoriamente Segundo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Tunja.
3. Publicadas las vacantes del mes de agosto de 2024, y dado que algunas de ellas eran de mi interés, opté por las plazas de escribiente municipal del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Monquirá – Boyacá y Juzgado Promiscuo Municipal de Motavita – Boyacá; solicitud de traslado que huelga decir, tiene asidero en los artículos 134 y 152 de la Ley 270 de 1996.

4. Mediante decisión CSJBOYO24-3403, el Consejo Seccional de la judicatura de Boyacá y Casanare, emitió concepto desfavorable de traslado al considerar que no cumplí con uno de los requisitos establecido en el artículo 13 del Acuerdo PCSJA17-10754 del 16 de septiembre de 2017, pues indica:

*“(...) se establece que el servidor judicial no acreditó el requisito de haber obtenido la última calificación integral de servicios en firme, en el cargo y **despacho del cual solicita el traslado**, toda vez que aportó un formato de calificación de servicios del cargo de Escribiente del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Moniquirá - Boyacá, del período comprendido entre el 5 de mayo y el 31 de diciembre de 2023, por tal razón no cumple con el requisito señalado en el artículo décimo tercero del Acuerdo PCSJA17- 10754 de 2017.”*

5. En concreto, el concepto desfavorable de traslado es emitido por cuanto no se aportó con la solicitud, calificación integral de servicios en firme, del despacho del cual solicito el traslado, esto es, del Juzgado Quinto Civil Municipal Transitoriamente Segundo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples, del cual me posesioné el 11 de julio del corriente año; pues la calificación aportada, en firme, y del año inmediatamente anterior, es del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Moniquirá.
6. Interpuesto el recurso de reposición y en subsidio de apelación, se confirmó la precitada decisión mediante Resoluciones CSJBOYR24-955 del Consejo Seccional de la judicatura de Boyacá y Casanare y CJR24-0507 de la Unidad de Administración Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.
7. Las precitadas decisiones vulneran mis derechos al debido proceso, seguridad jurídica y los derechos que como servidor de carrera ostento, pues las entidades accionadas exigen requisitos que la Ley 270 de 1996, no contemplaba al momento de la solicitud de traslado; fundando dichos requerimientos en el Acuerdo PCSJA17-10754 del 16 de septiembre de 2017, Acto Administrativo que se reitera, impone cargas que el legislador no previó para situaciones como la que aquí se estudia.
8. Habiéndose agotado los recursos ordinarios contra las referidas decisiones, y como quiera que las mismas van en contravía de mis derechos fundamentales, acudo a la acción de tutela para la protección inmediata de mis derechos fundamentales, a efectos de precaver perjuicios mayores.

FUNDAMENTOS DE DERECHO Y RAZONES DE LA VULNERACIÓN

Visto lo anterior, encuentra el suscrito que el legislador, a través de los artículos 134 y 152 de la Ley 270 de 1996, modificado el primero de ellos por la Ley 771 de 2002, regula los traslados

de los servidores de la rama judicial, en los cuales no se imponen mayores requisitos para tal solicitud.

El artículo 134 de la ley 270 de 1996, modificado por la Ley 771 de 2002, estipula:

“Artículo 134. Traslado. Se produce traslado cuando se provee un cargo con un funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones afines, de la misma categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos, aunque tengan distinta sede territorial. Nunca podrá haber traslados entre las dos Salas de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

Procede en los siguientes eventos:

1. Cuando el interesado lo solicite por razones de salud o seguridad debidamente comprobadas, que le hagan imposible continuar en el cargo o por estas mismas razones se encuentre afectado o afectada su cónyuge, compañera o compañero permanente, descendiente o ascendiente en primer grado de consanguinidad o único civil, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para el funcionario y medie su consentimiento expreso.

2. Cuando lo soliciten por escrito en forma recíproca funcionarios o empleados de diferentes sedes territoriales, en cuyo caso sólo procederá previa autorización de la Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura.

Quando el traslado deba hacerse entre cargos cuya nominación corresponda a distintas autoridades, sólo podrá llevarse a cabo previo acuerdo entre éstas.

3. Cuando lo solicite un servidor público de carrera para un cargo que se encuentre vacante en forma definitiva, evento en el cual deberá resolverse la petición antes de abrir la sede territorial para la escogencia de los concursantes.

4. Cuando el interesado lo solicite y la petición esté soportada en un hecho que por razones del servicio la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura califique como aceptable.”

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA17-10754 del 16 de septiembre de 2017, *“Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se dictan otras disposiciones en la materia”*, reglamentó lo atinente a los traslados.

Es en el precitado acuerdo, en donde en su numeral 13, se impone una carga a los servidores de carrera, debiendo estos, en cuanto se solicite traslado, aportar calificación de servicios *“en firme respecto del cargo y despacho desde el cual solicita el traslado.”*

A juicio del suscrito, dicho acuerdo impone una carga no contenida en la Ley para elevar petición de traslado, pues se exige calificación de servicios en firme del despacho del que se solicita el mismo, sin el cual, no es dable si quiera optar por un traslado.

El Consejo de Estado se pronunció respecto de las calificaciones integrales que otrora se exigieran con puntaje superior a 80 puntos, en el sentido de indicar que:

“A criterio de esta Sala las disposiciones reglamentarias desbordan los límites de su competencia en cuanto a la capacidad del Consejo Superior de la Judicatura para reglamentar el precepto de orden superior que incorpora el derecho de traslado, por cuanto que incorporó una situación adicional como fue la relativa a la calificación de la evaluación de servicios y las pruebas documentales para autorizar un traslado; cuestión que es propia de la Ley 270 de 1996 y no de la entidad demandada, que pese a tener facultades para “administrar la carrera judicial” y expedir actos reglamentarios en esa materia, sólo puede ejercer esas atribuciones de conformidad con los límites precisados por la Constitución Política y la Ley.” (Subrayado fuera de texto)¹

Es decir, si bien el Consejo Superior de la judicatura cuenta con la facultad para reglamentar los traslados de los servidores judiciales, no es menos cierto que dichas facultades se encuentran limitadas por aquello que el legislador a través de la Ley 270 de 1996 y 771 de 2002 ha dispuesto.

Por lo que se itera, exigir, como en el presente caso ocurre, una calificación integral de servicios del despacho del cual se solicita el traslado, con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo PCSJA17-10754 del 16 de septiembre de 2017, impone una carga o requisito que la ley no contempla, y que deviene en una flagrante vulneración de mis derechos fundamentales ya relacionados.

En el mismo sentido, ha indicado el Consejo de Estado:

“(…) el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, deben circunscribirse exclusivamente a revisar el advenimiento de las condiciones previstas por el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, para efectos de calificar de aceptable o no la respectiva petición, concretando así un derecho de raigambre constitucional”²

Por lo que, a efectos de analizar la viabilidad del traslado, es menester que se dé estricta observancia a lo normado en la Ley estatutaria de administración de justicia, misma que regula

¹ Consejo de Estado, Radicado 11001-03-25-000-2015-01080-00. C.P Dr. César Palomino Cortés

² Consejo de Estado, Radicado 11001-03-25-000-2015-01080-00. C.P Dr. César Palomino Cortés

la materia, y la cual debe ser la base para el análisis de toda solicitud de dicho talante, pues como se ha expresado:

“(…) si bien se autoriza al Consejo Superior de la Judicatura en aras de no afectar el servicio de administración de justicia, para que emita su “concepto previo” sobre los traslados, este concepto no puede basarse en requisitos adicionales a los previstos por el Legislador para la concreción de dicho derecho del trabajador, ni suplantarse la labor del nominador del cargo, por cuanto que de hacerlo, se estaría abrogando la función de autorización del traslado y no la de calificar la solicitud como de aceptable o no, que es específicamente lo que le corresponde por mandato del artículo 134 de la mencionada Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Máxime si se tiene en cuenta que dentro de la Rama Jurisdiccional del Poder Público los traslados de funcionarios es una de las maneras por medio de las cuales quienes se encuentran en carrera judicial acceden a otros cargos que se hallan vacantes de manera definitiva, por lo que al reglamentar este procedimiento con requisitos que desbordan los exigidos por la ley, el Consejo superior de la Judicatura se inmiscuyó indebidamente en la regulación del derecho fundamental de acceso a los cargos públicos, atribución predicable solamente del legislador.”

(…)

“En tal sentido, el Consejo Superior de la Judicatura debe limitarse a reglamentar aquellos aspectos requeridos para operativizar y darle vida a la Ley, garantizando la plenitud de las prerrogativas instituidas a favor de los trabajadores de la Rama Judicial, y no a generar requisitos adicionales que lo que en la práctica conllevan es a poner talanqueras de acceso a los derechos laborales de los servidores públicos a su servicio, como ocurre en este caso preciso tratándose del derecho de traslado.”³

Así las cosas, y como quiera que los requisitos que se reputan ausentes y que fundaron el concepto desfavorable de traslado del suscrito JORGE ENRIQUE GUIO PINTO, Escribiente Municipal del Juzgado Quinto Civil Municipal Transitoriamente Segundo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples, no son exigidos en la ley, es menester que se protejan los derechos del suscrito a la seguridad jurídica, por cuanto el Consejo Superior de la Judicatura legisla sin que esté facultado para ello, imponiendo cargas adicionales, las cuales el suscrito no está obligado a soportar, y que a su vez lesionan derechos de rango fundamental.

Así mismo, no se ofrecen las garantías necesarias para un debido proceso administrativo, en tanto las decisiones adoptadas se fundan en reglas y requisitos que el legislador no estableció, por lo que el análisis realizado por las accionadas, a la petición realizada, no tiene en cuenta el marco jurídico realmente aplicable al caso.

MEDIDA PROVISIONAL

³ Consejo de Estado, Radicado 11001-03-25-000-2015-01080-00. C.P Dr. César Palomino Cortés.

Solicito como medida provisional, se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, se abstenga de remitir la lista de elegibles para proveer el cargo de Escribiente Municipal a los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Moniquirá, y Promiscuo Municipal de Motavita, hasta tanto se emita decisión de fondo dentro del presente tramite constitucional.

Dicha medida resulta pertinente y necesaria, en tanto la remisión de las listas de elegibles a los mentados despachos previo a que se tome una decisión de fondo en el presente diligenciamiento, haría ilusorias las posibles ordenes que se impartan; en tanto si se surte el nombramiento en dichos cargos sin que el nombre del suscrito haga parte de las listas, desconocería los eventuales derechos que al suscrito le asistirían.

PETICIONES

1. Respetuosamente solicito se tutelen los derechos invocados como vulnerados.
2. Se deje sin efecto las resoluciones CSJBOYO24-3403 y CSJBOYR24-955 del Consejo Seccional de la judicatura de Boyacá y Casanare y CJR24-0507 de la Unidad de Administración Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.
3. Se ordene al Consejo Seccional de la judicatura de Boyacá y Casanare, emita concepto favorable de traslado respecto del suscrito, para el cargo de Escribiente Municipal, para las vacantes del mismo empleo en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Moniquirá, y del Juzgado Promiscuo Municipal de Motavita. Esto teniendo en cuenta que el único fundamento para emitir concepto desfavorable de traslado, fue el artículo 13 del Acuerdo PCSJA17-10754 del 16 de septiembre de 2017; exigiendo requisitos diferentes a los contemplados en la Ley 270 de 1996.

COMPETENCIA

Es competente el Honorable Consejo de Estado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 333 de 2021, como quiera que el suscrito es empleado judicial de la jurisdicción ordinaria.

PRUEBAS

1. Copia de las resoluciones CSJBOYO24-3403 y CSJBOYR24-955 del Consejo Seccional de la judicatura de Boyacá y Casanare.
2. Copia de la resolución CJR24-0507 de la Unidad de Administración Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

3. Certificación de *efinómina* con la que se prueba el vínculo laboral.

NOTIFICACIONES

Al suscrito en el correo electrónico je.guio.p@gmail.com, o en la carrera 4 numero 34 – 90 de Tunja, Boyacá.

Al Consejo Superior de la Judicatura, a los correos electrónicos presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co y carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co

Al Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, al correo electrónico entradasatun@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE GUIO PINTO

C.C 1.049.642.281 de Tunja.